



SE PUBLICA

SE SUSCRIBE

Todos los Mártes, Jueves y Sábados.

En la Imprenta de Gonzalez. Fortaleza 15.

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

AÑO 1868.

MARTES 18 DE AGOSTO.

NUM. 99.

## PARTE OFICIAL.

Dirección de Administración Local  
DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL  
DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

Por la Subsecretaría del Ministerio de Ultramar y con fecha 17 de Julio próximo pasado se dice al Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil de esta Isla de Real orden número 330 lo que sigue:

“Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Ultramar dice hoy al Presidente del Consejo de Estado lo que sigue:—Vista la demanda presentada en la Secretaría general del Consejo de Estado el día 9 de Junio último por el Dr. D. Fernando Vida en nombre de D. Miguel Baldor, vecino de esta Corte, contra la Real orden expedida por este Ministerio en 21 de Mayo próximo anterior, que declaró improcedente la adjudicación definitiva del servicio de conducción de la correspondencia entre la Habana y Veracruz, y entre la Habana y Puerto-Rico en favor de dicho interesado: vistos los antecedentes del asunto, de los que resulta que, autorizado el Sr. Ministro de Ultramar para contratar mediante pública subasta el expresado servicio y celebrado este acto, solo se presentó una proposición firmada por el citado D. Miguel Baldor comprometiéndose a desempeñar aquel, cobrando por viaje redondo la cantidad de once mil escudos en la línea de la Habana á Veracruz, y la de seis mil en la de dicha Capital á Puerto-Rico, siendo el tipo fijado por el Gobierno en Consejo de Ministros el de ocho mil escudos para la segunda línea y el de nueve mil para la primera: que en su vista y previas las explicaciones dadas por el proponente sobre el sentido de su proposición declaró el Presidente terminado el acto, adjudicando provisionalmente el servicio al referido D. Miguel Baldor, á reserva de la aprobación del Consejo de Sres. Ministros por cuyo acuerdo pasó el asunto á informe del Consejo de Estado en pleno, habiéndose expedido de conformidad con su dictamen la expresada Real orden de 21 de Mayo contra la que se recurre actualmente, y publicándose en su virtud Real Decreto en igual fecha de 21 de Mayo último, que dispuso la celebración de nueva subasta del indicado servicio para el 6 de Julio actual, bajo el mismo pliego de condiciones de 29 de Octubre de 1867; considerando que en virtud de la adjudicación provisional del servicio, que se hizo al demandante en el acto de la subasta, no adquirió este un derecho perfecto al remate que pueda invocar, y que en consecuencia tampoco puede alegar agravios reparables en la vía contenciosa contra el citado acto administrativo que desaprobó la adjudicación definitiva de dicho servicio; la Reina (q. D. g.) de conformidad con el parecer de la Sección de lo contencioso del Consejo de Estado ha tenido á bien declarar que no procede la admisión de la demanda presentada por D. Fernando Vida en nombre de D. Miguel Baldor, contra la Real orden de 21 de Mayo último.—De Real orden comunicada por el referido Sr. Ministro lo trasladado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.”  
Y dispuesto hoy por S. E. el cumplimiento de la preinserta Real orden, se publica en este periódico para conocimiento general. Puerto-Rico 13 de Agosto de 1868.—Carlos de Rojas.

## INSPECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar con fecha 25 de Julio último y bajo el número 331 dice de Real orden al Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil de esta Isla lo siguiente:—“Excmo. Sr.:—La Reina (q. D. g.) se ha servido expedir con esta fecha el Real Decreto siguiente:—“Vista la instancia de los concesionarios del riego de la jurisdicción de Guayama en la Isla de Puerto-Rico, en la que solicitan se les permita ceder el usufructo de las aguas á D. Ricardo Alberto Moll, del comercio de Lóndres, durante el período de treinta y dos años, á contar desde el día en que terminadas las obras puedan los propietarios regar sus campos, abonando el canon de ciento veinte y ocho escudos por hectárea y en cuya instancia se pide además seis meses de próroga para dar principio á los trabajos. Vistos los informes emitidos en el asunto por la Inspección de Obras públicas y Dirección de Administración Local aconsejando se acceda á la solicitud de los interesados. Vista la carta del Gobernador Superior Civil, de fecha 20 de Junio próximo pasado recomendando la favorable resolución de este asunto. Vista la Ley de aguas de 3 de Agosto de 1866 aplicada á aquella Isla por Real orden de 8 del mismo. Visto el Decreto de la concesión de que se trata de fecha 27 de Noviembre de 1866. Considerando que según el artículo 18 del pliego de condiciones de dicha concesión, corresponde al Gobierno resolver sobre la transferencia y que en el presente caso es de la mayor conveniencia acceder á ella, pues permitirá la realización de una obra que ha de producir un considerable aumento de riqueza en la jurisdicción de Guayama: Considerando que según el artículo 4.º del referido Decreto el tipo máximo del canon era de 165 escudos por hectárea de terreno y por cada diez y ocho riegos de una capa mínima de cuarenta y seis milímetros, y por consiguiente que el que hoy se marca de ciento veinte y ocho escudos no puede menos de aceptarse como mas conveniente para los regantes: Considerando que la próroga de seis meses que se solicita á los tres marcados en el artículo 2.º del expresado pliego de condiciones y para dar principio á los trabajos, se encuentra perfectamente justificada por las condiciones especiales de aquella Isla. A propuesta del Ministerio de Ultramar vengo en decretar lo siguiente: Artículo 1.º Se aprueba la transferencia hecha por los concesionarios del riego á la jurisdicción de Guayama en favor de D. Ricardo Alberto Moll, por espacio de treinta y dos años, á contar desde el día en que se terminen las obras quedando este, tanto durante la construcción como en el período expirado, obligado para con el Gobierno al cumplimiento de las prescripciones fijadas en el Decreto y orden de 27 de Noviembre de 1866. Artículo 2.º El canon máximo que abonarán los regantes, será de ciento veinte y ocho escudos por hectárea de terreno y por cada diez y ocho riegos de una capa mínima cada uno de cuarenta y seis milímetros. Artículo 3.º Los trabajos empezarán dentro del plazo de nueve meses á contar desde el día trece de Junio del corriente. —Dado en San Ildefonso á 25 de Julio 1868.—Está rubricado de la Real mano. El Ministro de Ultramar, TOMAS RODRIGUEZ RUBI.—De Real orden lo comunico

á V. E. para su inteligencia y fines consiguientes.”  
Y puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil á la precedente Soberana disposición se inserta en la GACETA para conocimiento general. Puerto-Rico 14 de Agosto de 1868.—Miguel Martínez de Campos.

## INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

Secretaría.—Sección 1.ª—Personal.

Por la Subsecretaría del Ministerio de Ultramar bajo el número 289 y con fecha 20 de Julio próximo pasado, se ha comunicado al Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil de esta Isla la Real orden que sigue:—

“Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Ultramar dice con esta fecha al Gobernador Superior Civil de las Islas Filipinas lo siguiente:—Para la plaza de Oficial segundo de Administración vacante en la Oficina de Hacienda de esas Islas, por pase á otro destino de D. Nicolás Lopez Gutierrez, dotada con el sueldo anual de mil doscientos escudos y dos mil de sobre sueldo, la Reina (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar á D. José María de Juan y Zorrilla, Oficial tercero Inspector de la Aduana de la Capital de Puerto-Rico, con mas de dos años en este empleo; comprendido en el artículo 35 del Reglamento orgánico de 3 de Junio de 1866.—De Real orden comunicada por el referido Sr. Ministro lo trasladado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.”

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de ayer, de orden del Illmo. Sr. Intendente general se publica en la GACETA OFICIAL de esta plaza, con arreglo á lo prevenido en el artículo 45 del Real Decreto orgánico de 3 de Junio de 1866. Puerto-Rico 14 de Agosto de 1868.—José Justo Varela.

Secretaría.—Sección 1.ª

Por el Ministerio de Ultramar bajo el número 290 y con fecha 20 de Julio próximo pasado, se ha comunicado al Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil de esta Isla la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—Con arreglo á lo establecido en el artículo 39 del Reglamento orgánico de 3 de Junio de 1866, la Reina (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar Oficial 2.º de Administración con destino á servir en comisión la plaza de 3.º Inspector de la Aduana local de esa Capital, vacante por pase á otro destino de D. José María de Juan y Zorrilla, á D. José María Pacheco, Oficial 5.º que ha sido de Administración Civil con mas de dos años y hoy 4.º con destino á la Secretaría de la Junta general de Beneficencia de Cádiz; cuyo interesado percibirá en su nuevo empleo el sueldo de 1200 escudos y sobre sueldo de igual cantidad, con arreglo al artículo 50 del expresado Reglamento. De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.”

Y dispuesto el cúmplase por S. E. con fecha de hoy de la anterior Real disposición, de orden del Illmo. Sr. Intendente general se publica en la GACETA OFICIAL de esta plaza, con sujeción á lo prevenido en el artículo 45

del Reglamento orgánico de 3 de Junio de 1866. Puerto-Rico 13 de Agosto de 1868.—José Justo Varela.

Por el Ministerio de Ultramar bajo el número 307 y con fecha 22 de Julio próximo pasado, se ha comunicado al Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil de esta Isla la Real orden que sigue:

“Excmo. Sr.:—La Dirección general de Impuestos indirectos dice á la de Hacienda de este Ministerio, con fecha 19 del actual lo siguiente:—Siendo frecuente el caso de presentarse en las Aduanas de la Península mercaderías procedentes de nuestras posesiones de Ultramar, cuya documentación ambigua, no precisa categóricamente unidad arancelaria ó su nomenclatura, como ha sucedido recientemente con una partida de azúcar, en que se expresaba su peso á diez y seis arrobas *aproximadamente*, dando lugar á la formación de expedientes que en último resultado redundará en perjuicio del Tesoro y producen entorpecimientos al comercio, he de merecer de V. S. I. se sirva ordenar á las Administraciones de Aduanas ultramarinas, la necesidad de no dar curso á las pólizas de mercancías destinadas á la Península, si no se hallan redactadas en la forma y con la nomenclatura que previenen las ordenanzas y aranceles vigentes.—De Real orden lo traslado á V. E. para los efectos indicados en la preinserta comunicación, y á fin de que, de acuerdo con la Intendencia de Hacienda, se sirva V. E. adoptar las medidas que juzgue necesarias para hacer que los buques que salgan de esa Isla para la Península, lleven en regla y conforme á lo mandado en la legislación vigente, toda su documentación.”

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de ayer, de orden del Illmo. Sr. Intendente general se publica en la GACETA OFICIAL de esta plaza para conocimiento de quienes corresponda. Puerto-Rico 14 de Agosto de 1868.—José Justo Varela.

## PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Don Eduardo Royleyro, Abogado de los Tribunales del Reyno, y Escribano de Cámara de esta Real Audiencia.

Certifico: Que por la misma se pronunció la siguiente sentencia:—En la ciudad de Pto.-Rico á seis de Agosto de mil ochocientos sesenta y ocho; en el pleito civil ordinario de mayor cuantía seguido en el Juzgado de esta Capital por D. Antime Durecú contra D. Edmundo Fontanet y compañía, en cobro de once mil setecientos sesenta y ocho escudos, setenta céntimos, procedentes de préstamo, constante de escritura pública, como refacción para una fábrica de rom, pendiente ante Nos en virtud de apelación interpuesta por el demandante Durecú de la sentencia de diez y ocho de Mayo de este año pronunciada por el Juez inferior.—Vistos: Siendo ponente el Magistrado D. Julian Pelaez del Pozo:—Considerando que para los pleitos en que dé origen el ejercicio de las acciones de toda clase es Juez competente aquel á quien los litigantes se hubiesen sometido expresa ó tácitamente según el artículo dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil:—Considerando que según el artículo cuarto de la misma Ley el demandante se entiende sometido tácitamente por el hecho de recurrir al Juez interponiendo su demanda siempre que dicho Juez